

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 29 .-

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 2º Juzgado de Letras de Quillota
CAUSA ROL	: C-1881-2023
CARATULADO	: I.MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ/ARRAZTOA

Quillota, tres de enero de dos mil veinticinco.

Vistos.

A folio 1, comparece Patricio Anders Torres, abogado, domiciliado en calle Gabriela Mistral comuna de La Cruz, en representación de la **I. Municipalidad de La Cruz**, representada por la Alcaldesa Filomena Navia Hevia, del mismo domicilio, e interpone demanda ejecutiva en contra de doña **MIRENTXU ARRAZTOA LARRONDO**, cédula nacional de identidad N°16.141.438-7, en su calidad de candidata a Alcaldesa por la comuna de La Cruz, Región de Valparaíso, en las elecciones de Gobernadores Regionales, Convencionales Constituyentes, Alcaldes y Concejales de 2021, con domicilio en calle Ricardo Santa Cruz N°298, comuna de La Cruz, Región de Valparaíso, solicitando se despache mandamiento de ejecución y embargo, en su contra por la cantidad equivalente a 20 UTM, y ordenar se siga adelante con la ejecución hasta hacerse el entero y cumplido pago de estas cantidades, más intereses y reajustes, con costas.

Funda su demanda señalando que su representada es titular del cobro de la multa cursada por el Servicio Electoral, en Procedimiento Administrativo Sancionatorio Rol N°53/2021, mediante la Resolución Final O N°S/8438/2022, en que se dispuso la aplicación de una **multa de 20 UTM**, a beneficio de la I. Municipalidad de La Cruz, La multa se encuentra impaga, lo que obliga exigir su pago.

El título ejecutivo fundante para los efectos del cobro de la multa establecida en la Resolución Final O N° S/8439/2022, de fecha 09 de septiembre de 2022, del Servicio Electoral, corresponde a la copia fiel de la Resolución de Cumplimiento y Archivo O N° S/2319-2023, de fecha 08 de mayo de 2023, emitida por el Servicio Electoral. Esta resolución fue debidamente notificada, como consta en la certificación de fecha 08 de mayo de 2023, realizada por doña Macarena Manríquez Farias, Fiscal, Subdirección de Control del Gastos y Financiamiento Electoral.

La obligación es líquida, actualmente exigible, el título tiene mérito ejecutivo y la acción ejecutiva no se encuentra prescrita, por lo que procede la ejecución en contra de la obligada al pago.

A folio 12, la ejecutada opone excepciones.

A folio 16, la ejecutante evacua traslado.

A folio 18, se reciben las excepciones a prueba.

A folio 30, se cita a las partes para oír sentencia.

Considerando.

Primero. A folio 1, comparece Patricio Anders Torres, abogado, domiciliado en calle Gabriela Mistral comuna de La Cruz, en representación de la **I. Municipalidad de La**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MUXRXRTDKZZ

«RIT»

Foja: 1

Cruz, representada por la Alcaldesa Filomena Navia Hevia, del mismo domicilio, e interpone demanda ejecutiva en contra de doña **MIRENTXU ARRAZTOA LARRONDO**, cédula nacional de identidad N°16.141.438-7, en su calidad de candidata a Alcaldesa por la comuna de La Cruz, Región de Valparaíso, en las elecciones de Gobernadores Regionales, Convencionales Constituyentes, Alcaldes y Concejales de 2021, con domicilio en calle Ricardo Santa Cruz N°298, comuna de La Cruz, Región de Valparaíso, solicitando se despache mandamiento de ejecución y embargo, en su contra por la cantidad equivalente a 20 UTM, y ordenar se siga adelante con la ejecución hasta hacerse el entero y cumplido pago de estas cantidades, más intereses y reajustes, con costas.

Funda su demanda en los hechos que se han reseñado en la parte expositiva de esta sentencia.

Segundo. La ejecutada opone las siguientes excepciones a la ejecución.

1.- Incompetencia absoluta del tribunal, del artículo 464 n°1 del Código de Procedimiento Civil

Afirma, que por la materia, multa dentro del contexto de una infracción a la ley 18.700, al órgano del estado a quien se le da la fiscalización, conocimiento y sanción es a SERVEL, los dictámenes 75318/2016, 88189/2016, 28330/2017, 21895/2018, E115036/2021, E105328/2021 y E376048N23 de la Contraloría General de la República, los que ratifican una y otra vez que " conforme a los cuales la fiscalización, conocimiento y sanción de las contravenciones al artículo 31, inciso cuarto, de la ley N° 18.700 -sobre Votaciones Populares y Escrutinios-, son atribuciones radicadas expresamente en ese organismo, en virtud de lo señalado en el inciso segundo del 157 del citado texto legal" En ninguna parte se le otorga competencia a los tribunales de letras en lo civil para hacer ejecutar lo sancionado por el SERVEL, por el contrario, señala el procedimiento y la manera que se realice la sanción, faltando el demandante inclusive la regla procesal de radicación o fijeza que rige sobre la materia.

A quien debiese pedirle el Municipio y solicitar que rinda cuentas sobre la materia es a SERVEL, no a su representada, y para ello tiene los mecanismos que el derecho público establece, el municipio a este respecto está obrando fuera de sus facultades constitucionales y legales. Aplica artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

2.- La falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparece en su nombre, del artículo 464 N°2 del Código de Procedimiento Civil.

La multa impuesta a beneficio municipal no condice que sea el municipio quien tenga la legitimación activa para requerir el pago, una cosa es que donde debe pagarse la multa sea en el municipio y cosa distinta es quien debe requerir el mismo, y al efecto, según la ley 18.700 es el Servicio Electoral, en ninguna parte de la ley se le otorga capacidad a una municipalidad para exigir el pago, simplemente el municipio tiene la capacidad de recibirlo, pero no de exigirlo.

A lo sumo el municipio podría requerir al SERVEL que lo requiera y en caso de desidia u oposición, recurrir a Contraloría para que se exija de dicho organismo que ejecute lo que ha de realizar.

3.- La falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado, del artículo 464 N°7 del Código de Procedimiento Civil.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MUXRXRTDKZZ

«RIT»

Foja: 1

Sostiene, que la resolución administrativa cuyo cobro se pretende se sustenta según la propia demanda ejecutiva en el artículo 434 N°7 del Código de Procedimiento Civil, pero en ninguna parte se hace cargo de qué normativa de rango legal otorga al documento acompañado fuerza ejecutiva, no existe ley que sustente una resolución de carácter administrativa, por más que sea de término, por lo que la acción ejecutiva carece de todo sustento legal.

4.- La prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva, del artículo 464 N°17 del Código de Procedimiento Civil.

Expresa, que lo cobrado en la resolución tiene la naturaleza jurídica de una falta, la cual se encuentra prescrita al haber transcurrido el término de 6 meses a contar de la aplicación de la sanción por parte de la autoridad administrativa. El artículo 163 de la Ley 18.700 señala que la prescripción es de 1 año a contar de la elección correspondiente, lapso que se encuentra transcurrido; si se cuenta desde cuándo nace el derecho a exigir la sanción, nace un nuevo plazo para el cobro de la falta -que es de 6 meses-, al no haber regulación en particular sobre cuándo prescribe ahora la sanción, es necesario recurrir al derecho penal, que señala que el plazo de prescripción de la pena es de 6 meses. Por lo que se encuentra prescrita la pena que es la sanción administrativa, aplicando derechamente los artículos 97 y 97 del Código Penal.

Tercero. La parte ejecutante evacua traslado solicitando el rechazo de las excepciones.

1.- En cuanto a la excepción del N°1 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, de incompetencia absoluta del Tribunal.

Señala, que este tribunal es competente para conocer del presente proceso, el artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales, la define como “la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones”. Las reglas de la competencia absoluta son de orden público, para determinar la competencia absoluta de un tribunal jerárquicamente competente se debe atender a la cuantía, a la materia y al fuero personal.

Sostiene, que se trata de un proceso ejecutivo de cobro de una multa administrativa, la cual consta en un título que tiene mérito ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 número 12 del DFL N°5, que Fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, por lo que es de conocimiento de los tribunales ordinarios conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales que dispone que a los tribunales ordinarios les corresponde el conocimiento de todos los asuntos que se promuevan en el orden temporal dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan.

Al tratar de una multa dentro del contexto de Infracción al DFL N°2 de la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, cuya fiscalización, conocimiento y sanción le corresponde al Servicio Electoral, se vincula con el artículo 157 de dicha Ley, cuyo inciso segundo dispone: *“Sin perjuicio de lo anterior, el conocimiento de las infracciones sancionadas en los artículos 136, 137, 138, y 139, y en general la fiscalización de lo dispuesto en el párrafo 6° del título I corresponderá al Servicio Electoral, de conformidad a su ley orgánica”*. Por su parte, el DFL N°5 que Fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.556 Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, en el Título VI cuyo epígrafe se denomina “Del Servicio Electoral”, en el párrafo 7° se desarrolla “Del Procedimiento Administrativo Sancionador”. En el citado párrafo, regula los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MUXRXRTDKZZ

Foja: 1

procedimientos administrativos a que da lugar la aplicación de esta ley, fijando las reglas de inicio del proceso, la sustanciación, recursos que proceden, y concluye indicando en el artículo 75 N°12 *“La resolución que aplica la multa tendrá mérito ejecutivo”*, conforme a lo cual, la fiscalización, conocimiento y sanción de infracción a la Ley electoral le corresponde al Servicio Electoral, pero no le corresponde el cumplimiento o ejecución de este, el Servicio Electoral carece de la facultad de hacer ejecutar lo juzgado, cuya facultad radica exclusivamente en los Tribunales de Justicia Ordinario y especiales que integran el Poder Judicial. Son dichos tribunales lo que pueden impartir órdenes directas apremios o compulsivas, incluso a la fuerza pública para los efectos de hacer cumplir una resolución judicial, artículo 101 de la Constitución Política de la República de Chile.

El artículo 75 N°12 de la DFL N°5 que Fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, establece el mérito ejecutivo de la resolución que aplica multa, por lo que resulta de aquellos títulos que la ley le da dicha fuerza ejecutiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 434 N°7 del Código de Procedimiento Civil, por lo que este Tribunal resulta ser de competente.

Con relación a los dictámenes de la Contraloría General de la República referidos por la parte ejecutante, ellos guardan relación con infracciones cometidas por autoridades administrativas, quienes se encuentran sujetos a normas de control electoral y de probidad, lo que no ocurre en este caso. La resolución de multa de este proceso judicial es dirigida en contra de una persona natural por infracción a la ley electoral, respecto de la cual no ostenta la calidad de funcionario público que esté sujeta a las restricciones de intervencionismo electoral, por lo que menos se podrían decretar medidas de apremio por un órgano de la Administración pública, así las cosas, este Tribunal es competente para conocer del presente proceso ejecutivo, en virtud de la competencia que le otorgan las normas Constitucionales, leyes orgánicas constitucionales DFL N°5 que Fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.556 Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, y DFL N°2 que Fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

2.-En cuanto a la excepción del N°2 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

Sostiene que no existe falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal de quien comparece a su nombre, por lo que la actora se encuentra facultada para accionar en el presente proceso ejecutivo, en virtud de la competencia que le otorgan las normas Constitucionales, leyes orgánicas constitucionales, DFL N°5 que Fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; DFL N°2 que Fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios; y el DFL 1 que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil.

3.-En cuanto a la excepción del N°7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

Pide el rechazo de esta excepción atendido que el título fundante de la presente acción tiene fuerza ejecutiva en contra de la demandada, reitera lo expuesto y solicita tener por reproducidos. El DFL N°5 que Fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, en el Título VI cuyo epígrafe es “Del Servicio Electoral”, en el párrafo 7° desarrolla “Del Procedimiento Administrativo Sancionador”. En



«RIT»

Foja: 1

el citado párrafo, regula los procedimientos administrativos a que da lugar la aplicación de esta ley, fija las reglas de inicio del proceso, la sustanciación o instrucción, recursos que proceden, y concluye indicando en el artículo 75 N°12 *“La resolución que aplica la multa tendrá mérito ejecutivo”*.

4.- En cuanto a la excepción del N°17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, de prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva.

Solicita el rechazo de la excepción reiterando los argumentos vertidos en las otras excepciones y agregando que, si bien, la citada norma regula la prescripción de las faltas, infracciones o delitos establecidos en dicha ley, el inciso segundo del artículo 157 de la misma ley, el cual dispone: “Sin perjuicio de lo anterior, el conocimiento de las infracciones sancionadas en los artículos 136, 137, 138, y 139, y en general la fiscalización de lo dispuesto en el párrafo 6° del título le corresponderá al Servicio Electoral, de conformidad a su ley orgánica”, en la especie se está ante una infracción al artículo 138, cuyo conocimiento y fiscalización corresponde al Servicio Electoral conforme a su Ley Orgánica. Dicho cuerpo normativo -DFL N°5 que Fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral- regula en su Título VI: “Del Servicio Electoral”, y en el párrafo 7° desarrolla “Del Procedimiento Administrativo Sancionador”, el cual, de ser aplicada una sanción por una resolución administrativa, esta tendrá el mérito ejecutivo.

Sostiene que en la especie se inició un proceso de fiscalización por parte del Servicio Electoral, en el cual compareció debidamente representada la demandada, oportunidad en que formuló descargo y presentó prueba. Con fecha 9 de noviembre de 2022, se dictó la resolución que resolvió el Procedimiento Administrativo Sancionatorio por el Director del Servicio Electoral, Rol N°53-2021, Resolución Final O N°S/8438/2022, disponiendo la aplicación de multa a los infractores, dentro de los cuales está la demandada de autos. La demandada, conforme a las facultades que el confiere el número 10 del artículo 75 de la Ley N°18.556, dedujo Reclamación en contra dicha resolución para ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el 28 de noviembre de 2022. Luego, el día 01 de diciembre de 2022, se tuvo por interpuesto y se remitió al tribunal. El Tribunal Calificador de Elecciones, resolvió por sentencia de fecha 17 de febrero de 2023, causa Rol N°371-2022, rechazando la reclamación confirmando la resolución administrativa del Director del Servicio Electoral. El 08 de mayo de 2023, se dictó la Resolución Final O N°S/2319, que dispuso el cumplimiento del Proceso Administrativo Sancionatorio remitiéndose a la I. Municipalidad de La Cruz y a la Tesorería General de la República, y el archivo del proceso por estar finiquitada su tramitación. El mismo día 08 de mayo de 2023, se notificó la citada resolución a las partes.

Asimismo, la resolución dictada en el procedimiento administrativo sancionatorio tiene mérito ejecutivo, aplicándose a su respecto las normas generales de prescripción de la acción ejecutiva, esto es, 3 años, contados desde que la obligación se haya hecho exigible, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2514 y 2515, ambos del Código Civil, lo que ocurre con fecha 08 de mayo de 2023, cuando se notifica a las partes la resolución que ordena el cumplimiento del procedimiento administrativo sancionador Rol N°53, de 2021, por lo tanto, desde aquella data se computa el plazo de prescripción, el que a la fecha de notificación de la demanda no ha transcurrido, por tanto, la acción ejecutiva no se encuentra prescrita.

Cuarto. La parte ejecutante acompañó los siguientes documentos:

1.- Copia de Resolución de Cumplimiento y Archivo O N° S/2319-2023, de fecha 08 de mayo de 2023, emitida por el Servicio Electoral.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MUXRXRTDKZZ

«RIT»

Foja: 1

2.- Copia de certificación de fecha 08 de mayo de 2023, realizada por doña Macarena Manríquez Farias, Fiscal, Subdirección de Control del Gastos y Financiamiento Electoral.

3.- Copia de Resolución Final O N° S/8439/2022, de fecha 09 de septiembre de 2022, del Servicio Electoral.

4.- Copia de Sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, de fecha 17 de febrero de 2023, dictada en causa rol N°371-2022.

5.- Copia del Expediente del Procedimiento Administrativo Sancionatorio N°53-2021 por incumplimiento o infracciones a las normas del Párrafo 6 del Título I de la Ley N°18.700.

6.- Escritura pública de mandato judicial extendida con firma electrónica avanzada, Repertorio N°1.971- 2021, otorgada con fecha 07 de septiembre de 2021, ante Notario Público de la ciudad de Quillota don Julio Jorge Abuyeres Jadue.

Quinto. La parte ejecutada no rindió prueba.

Sexto. Del análisis de los antecedentes que obran en estos autos y, principalmente lo que dispone el artículo 75 N°12 de la DFL N°5 que Fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, el cual señala, "Artículo 75.- Los procedimientos administrativos a que dé lugar la aplicación de esta ley se sujetarán a las reglas de este artículo: 12. La resolución que aplica la multa tendrá mérito ejecutivo", es dable establecer que la Resolución Final O N°S/8438/2022, por la cual se dispuso la aplicación de una Multa de 20 UTM a la demandada tiene el carácter de título ejecutivo y correspondiendo a este tribunal el conocimiento de los procedimientos ejecutivos, resulta que es competente para conocer de este asunto, por lo que cabe rechazar la excepción de incompetencia del tribunal y en razón tener la Resolución Final O N°S/8438/2022, mérito ejecutivo, corresponde también rechazar la excepción del N°7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil .

Séptimo. De acuerdo a lo señalado en el artículo 138 del DFL N°2 que Fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, el que cometa infracción en relación a la propaganda electoral, será sancionado con multa a beneficio municipal, teniendo la Resolución Final O N°S/8438/2022 mérito ejecutivo y otorgándole la ley la calidad de beneficiaria a la actora, posee ésta legitimación activa para requerir el pago de la multa impuesta, por lo que se rechazará la excepción de falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparece en su nombre.

Octavo. Teniendo mérito ejecutivo la resolución fundante de la presente acción, corresponde a la misma someterla a las normas que rigen los procedimientos ejecutivos, así las cosas, el plazo para que opere la prescripción de la acción ejecutiva es de 3 años, contados desde que la obligación se haya hecho exigible, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil; en la especie y según los documentos acompañados, el plazo comienza a correr con la notificación de la resolución que ordena el cumplimiento del procedimiento administrativo sancionador Rol N°53, de 2021, fecha 08 de mayo de 2023, y al haberse notificado la demanda con fecha 27 de marzo de 2024, al no haber transcurrido el plazo de tres años, la acción ejecutiva no se encuentra prescrita y procede negar lugar a la excepción de prescripción deducida.

Noveno. La prueba que no se analiza en lo particular, en nada influye en lo dispositivo de esta sentencia.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MUXRXRTDKZZ

«RIT»

Foja: 1

Por las consideraciones anotadas y visto, además lo dispuesto en los artículos 160,170, 254, 434, 464,470, 471 del Código de Procedimiento Civil, 1698 del Código Civil, **se resuelve:**

Que, se rechazan, con costas, las excepciones deducidas por la parte ejecutada, debiendo seguirse adelante con la ejecución hasta el entero y cumplido pago de lo adeudado.

Dictada por Patricia Zavala Astudillo, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Quillota, tres de enero de dos mil veinticinco.**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MUXRXRTDKZZ